



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.**

---

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil diecinueve (2019)

<b>RADICADO:</b>	<b>11001-33-35-026-2017-00416-00</b>
<b>PROCESO:</b>	<b>EJECUTIVO</b>
<b>DEMANDANTE:</b>	<b>ÁLVARO CASTILLO SOTO</b>
<b>DEMANDADO:</b>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP</b>

Procede el Juzgado a pronunciarse sobre el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la entidad accionada, en contra del auto proferido el día 14 de septiembre de 2018 (fls. 49-53) a través del cual se ordenó librar mandamiento de pago a favor del señor Álvaro Castillo Soto, de conformidad con las siguientes.

**CONSIDERACIONES**

Recuerda el Despacho, que el día 14 septiembre de 2018, el Despacho profirió auto librando mandamiento de pago, el cual fue notificado por estado el 17 de septiembre de 2018, y notificado personalmente a la demandada mediante correo electrónico el día 20 de marzo de 2019.

Posteriormente, el 15 de mayo de 2019, la apoderada judicial de la entidad demandada propuso incidente de nulidad toda vez que se realizó una indebida notificación del auto que libra mandamiento de pago.

Este Despacho, mediante auto del 4 de junio de 2019, le asistió razón a la incidentante y resolvió declarar la nulidad procesal del acto de notificación personal del auto que dispuso librar mandamiento de pago. Así mismo, dispuso tener por surtida la notificación, por conducta concluyente, desde la fecha en que se instauró el incidente de nulidad. No obstante, respecto del término de traslado, se dispuso que empezaría a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia en que se resolvió el incidente.

Así las cosas, y habiéndose subsanado tal falencia, a través de memorial radicado el día 10 de junio del 2019, la apoderado de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, interpuso recurso de reposición en contra del auto que libro mandamiento de pago (fls.100-107); siendo argumentos centrales de tal recurso, las siguientes: caducidad de la acción, incongruencia del mandamiento de pago e inexistencia de la obligación.

A su vez, mediante memorial radicado el 19 de junio de 2019, la entidad demandada, en la cual propone excepciones de merito al presente tramite ejecutivo.<sup>1</sup>

### **Normatividad aplicable**

Debe decirse como primera medida, que la Ley 1437 de 2011, si bien se introdujo un título único y exclusivo, en referencia al proceso ejecutivo, en el mencionado acápite solo se reguló lo relativo a los documentos que componen el mismo, razón por la cual de acuerdo a la norma precitada hay que remitirse a la normatividad procesal vigente, esto es, el Código General del Proceso, ello a su turno, por la remisión que se realiza en tal sentido por el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al tenor señala:

***“Artículo 306. Aspectos no regulados.** En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”*

Ahora, es menester precisar que a diferencia de la Ley 1437 de 2011<sup>2</sup>, el Código General del Proceso, no estableció una cláusula diferencial de aplicación en el tiempo de la ley diferente a la regla general expuesta previamente, y por consiguiente necesariamente debe darse aplicación de manera general e inmediata a sus disposiciones a partir de su vigencia.

Por lo expuesto, el Despacho precisa que la normatividad vigente en materia de procedimiento es la contenida en el Código General del Proceso, no así respecto de las obligaciones contenidas en la sentencia, pues la misma fue proferida en oportunidad anterior, momento en el cual se encontraba vigente el Código Contencioso Administrativo.

En ese orden, el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, establece los parámetros para notificar el auto que libra mandamiento de la siguiente manera:

***“Artículo 199. Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento de pago a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a particulares que deban estar inscritos en el registro mercantil.***

*El auto admisorio de la demanda y el mandamiento de pago contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones propias del Estado se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a*

---

<sup>1</sup> Folios 109-120

<sup>2</sup> Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instaren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.

quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.

(...)

Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario hará constar este hecho en el expediente.

En este evento, las copias de la demanda y de sus anexos quedarán en la secretaría a disposición del notificado y el traslado o los términos que conceda el auto notificado, sólo comenzarán a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación. Deberá remitirse de manera inmediata y a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a su disposición de conformidad con lo establecido en este inciso.

En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde sea demandada una entidad pública, deberá notificarse también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los mismos términos y para los mismos efectos previstos en este artículo. En este evento se aplicará también lo dispuesto en el inciso anterior.

(...).

Subraya fuera de texto

De acuerdo a la norma antes descrita, se tiene que los términos que conceda el auto que libra mandamiento de pago, únicamente comenzarán a correr al vencimiento del término común de 25 días después de surtida la última notificación, lo anterior, en razón a que, como se dijo en líneas anteriores, se deben aplicar las reglas del Código General del Proceso.

A su turno, se tiene que el artículo 438 del Código General del Proceso, determinó los mecanismos procesales de oponibilidad frente al auto que ordena librar mandamiento ejecutivo, en los siguientes términos:

**“Artículo 438. Recursos contra el mandamiento ejecutivo.** El mandamiento ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de reposición lo revoque, lo será en el suspensivo. Los recursos de reposición contra el mandamiento ejecutivo se tramitarán y resolverán conjuntamente cuando haya sido notificado a todos los ejecutados”

En este mismo sentido, el artículo 318 del mismo estatuto, respecto del recurso de reposición dispuso:

**“Artículo 318. Procedencia y oportunidades.** Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.

*El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.*

***El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.”***

(Negrillas del Despacho)

Ahora bien, descendiente al caso sub lite, y como se expuso anteriormente, el auto que libró mandamiento ejecutivo, luego de haber resuelto el incidente de nulidad por indebida notificación presentando, quedó notificado por conducta concluyente a partir el 15 de mayo de 2019. (fls. 97-99).

Así las cosas, al haber interpuesto el recurso de reposición dentro de los **3** días siguientes a la notificación del auto que resolvió tener por surtida la notificación, procederá el Despacho a la realización del análisis de los argumentos esbozados por la demandada, en contra del auto que ordenó librar mandamiento de pago por la vía ejecutiva, de la siguiente manera:

#### **i. Caducidad**

Como primera medida, se considera necesario aclarar el tema relativo a la presentación de la demanda ejecutiva dentro de la oportunidad procesal determinada en el ordenamiento jurídico.

Así las cosas, se observa que el numeral 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, norma vigente al momento de la expedición de la sentencia, frente a la oportunidad de presentación de la acción ejecutiva determinó:

***“Artículo 136. Modificado por el art. 23, Decreto Nacional 2304 de 1989, Modificado por el art. 44, Ley 446 de 1998 Caducidad de las acciones.***  
(...)

***11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial.”*** (Negrilla fuera de texto original)

A su vez el artículo 177 del mismo ordenamiento dispuso en su inciso final:

***“Artículo 177. Reglamentado por el Decreto Nacional 768 de 1993***  
(...)

***Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.”***

De este modo, en principio el ejecutante contaba con un término de cinco años a partir de la exigibilidad del derecho, para la presentación de la demanda ejecutiva,

es decir, dicho término iniciaba luego de vencidos los 18 meses que tiene la entidad para realizar el pago.

En tal virtud, y al analizar el plenario, se constata que el ejecutado es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, como entidad pública receptora de las funciones y todas las actividades adelantadas en su momento por la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.

Al respecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha determinado que en estos asuntos se generó una suspensión en la contabilización del término de caducidad para efectos de la presentación de la demanda ejecutiva, con ocasión del adelantamiento del proceso de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.; así lo expresó la Corporación:

***“2. Marco legal y jurisprudencial de la caducidad de la acción ejecutiva (...)***

***2.2*** De igual manera, es del caso señalar que aunque las normas procesales son de aplicación inmediata, los términos que comenzaron a correr en vigencia de una ley anterior, como lo es, el de caducidad, deben finalizar su conteo en aplicación de tal norma, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 40<sup>3</sup> de la Ley 153 de 1887, en esa medida, es preciso que dicho término continúe rigiéndose por lo señalado en el Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984, sin perjuicio de que en los demás asuntos procesales sea dispuesto lo establecido en el Código Contencioso de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

*(...)*

Significa lo anterior, que la sentencia que constituye título ejecutivo una vez transcurren dieciocho (18) meses, contados a partir de su ejecutoria, se hace exigible, momento desde el cual, inicia el lapso de los cinco (5) años para instaurar la acción ejecutiva.

***2.3.*** Por su parte, el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, dispuso en cabeza del Gobierno Nacional efectuar la liquidación de CAJANAL EICE, CAPRECOM y del Instituto de Seguros Sociales. En desarrollo de lo anterior, el Decreto 2196 de 12 de junio de 2009 suprimió a CAJANAL y dispuso su liquidación de manera inmediata.

La normativa aludida en su artículo 3º, prohibió a la Caja Nacional de Previsión Social iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social, dejándole la administración de la nómina de los pensionados, hasta cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, creada por la Ley 1151 de 2007<sup>4</sup>, entidad que cuenta con las funciones dispuesta en el artículo 156 ibídem, (...)

---

<sup>3</sup> “Artículo 40. Modificado por el art. 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.”

<sup>4</sup> “Artículo 156. Gestión de Obligaciones Pensionales y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Corregido por el art. 1, Decreto Nacional 1193 de 2012. Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Esta Unidad Administrativa tendrá a su cargo: ...”

**2.4.** Ahora bien, puntualmente respecto a los efectos de la liquidación de CAJANAL y la interrupción del conteo de caducidad de la acción ejecutiva, la Sección Segunda del Consejo de Estado en pronunciamientos que guardan analogía estrecha con el asunto en comento ha señalado<sup>5</sup>:

**“...En tales condiciones, por fuerza de la remisión normativa contenida en el inciso segundo del artículo 1° del Decreto Ley 254 de 2000, los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL no corrieron durante el tiempo que transcurrió en su liquidación administrativo que, según lo afirmado en la demanda, concluyó el 11 de junio de 2013.**

En esas circunstancias le asiste razón al impugnante, pues no ha operado el fenómeno de la caducidad de la acción. La formulación de la demanda ejecutiva ocurrida el 6 de febrero de 2015<sup>6</sup> tuvo lugar dentro del término de los cinco (5) años previsto en el numeral 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, acorde con la siguiente cronología: i) la condena impuesta por la jurisdicción cuyo cobro se pretende por vía ejecutiva se hizo exigible el 19 de febrero de 2008<sup>7</sup>; ii) **En virtud del Decreto 2196 de 2009 y de la Ley 550 de 1999, los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la entidad liquidada fueron suspendidos desde el 12 de junio de 2009 hasta su conclusión, que tuvo lugar el 11 de junio de 2013, esto es, por el espacio de cuatro (4) años; iii) levantada la suspensión de los términos de prescripción y caducidad de las obligaciones a cargo de Cajanal el 12 de junio de 2013 con la conclusión del trámite liquidatorio, se reanudó el cómputo de los cinco (5) años con que contaba la demandante para formular la demanda ejecutiva respecto de las obligaciones reconocidas en la sentencia condenatoria, término que hoy en día no ha vencido si se advierte que tan solo transcurrió 1 año, 3 meses y 25 días antes de la suspensión por liquidación de Cajanal, por lo que restan 3 años, 8 meses y 5 días posteriores al 12 de junio de 2013, esto es, hasta el 17 de febrero de 2016; vi) la demanda ejecutiva fue formulada por la demandante en sede judicial el 6 de febrero de 2015, esto es, dentro del término legal.”** (Negrilla fuera de texto original).

Dicha posición se acompasa al examinar un pronunciamiento más reciente de la Alta Corporación Contenciosa en donde se itera la interrupción del término de caducidad del proceso ejecutivo con ocasión de la liquidación de CAJANAL al indicar<sup>8</sup>:

(...)

<sup>5</sup> Sección Segunda- Consejo de Estado, Sección Segunda, 25 de agosto de 2015,

<sup>6</sup> Constancias de recepción y reparto visibles a folio 47.

<sup>7</sup> Acorde con los hechos narrados por el demandante, la ejecutoria de la sentencia condenatoria tuvo lugar el 18 de agosto de 2006, corriendo a partir de allí el término de 18 meses previsto por el inciso 4° del artículo 177, por lo que era exigible judicialmente su cumplimiento a partir del 19 de febrero de 2008.

<sup>8</sup> Consejo de Estado, Sección Segunda, 29 de marzo de 2016, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra, rad. 250002342000201501601-01 (5042-2015).

*...Sobre el particular, se tiene que mediante Decreto número 2196 de 2009<sup>9</sup> se dispuso la supresión y liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE creada por la Ley 6ª de 1945, transformada mediante la Ley 490 de 1998 en Empresa Industrial y Comercial del Estado con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al entonces Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, estableciéndose como plazo para culminar dicho proceso liquidatorio el 11 de junio de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 877 del 30 de abril de 2013...*

*Que como consecuencia de lo anterior, el 11 de junio de 2013, el Liquidador de la Cajanal EICE en Liquidación y el Ministerio de Salud y Protección Social, presentó el Acta Final de Liquidación, razón por la que, fue expedida la Resolución número 4911 del 11 de junio de 2013, por medio de la cual, se declaró terminado el proceso de liquidación de Cajanal EICE en Liquidación.*

*De conformidad con lo expuesto en precedencia, se tiene que al tratarse el presente asunto de la ejecución de una obligación contenida en una providencia judicial emitida por esta jurisdicción, se torna aplicable la exigencia procesal consagrada en el literal k) del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.*

*Ahora, la sentencia cuya ejecución se pretende cobró ejecutoria el 13 de julio de 2009<sup>10</sup>, de tal suerte que, al haber sido proferida la providencia que confirmó la reliquidación de la pensión de la actora en fecha 21 de mayo de 2009, se debe tener en cuenta los dieciocho (18) meses a que alude el inciso 4º del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, por lo que el término de caducidad se empieza a contar a partir del vencimiento de los aludidos dieciocho (18) meses, el cual feneció el 13 de enero de 2011, lo que significa que a partir de esta última fecha comenzó a correr el término de caducidad de la acción ejecutiva.*

***Sin embargo, para el presente caso dicho término se interrumpió desde el día 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013, período en el que se llevó a cabo el proceso de liquidación de Cajanal EICE, constituyéndose la ejecutante parte en el mismo sin obtener la cancelación de los valores reclamados, lapso que no contabiliza para el estudio del presupuesto de caducidad, conforme lo explicado en líneas precedentes..."***

*Bajo los anteriores lineamientos, se deduce que el trámite liquidatorio de la Caja Nacional de Previsión Social, - CAJANAL, interrumpe el lapso de caducidad de la acción ejecutiva."<sup>11</sup>*

---

<sup>9</sup> Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones.

<sup>10</sup> De acuerdo a la constancia visible a folio 29

<sup>11</sup> Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Segunda - Subsección "E". Despacho No. 13. Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Aprobada en acta de la fecha. Auto N° 83. Magistrada Publicación: PATRICIA VICTORIA MANJARRÉS BRAVO.

Pues bien, conforme a lo explicado anteriormente, si se examinan los términos de presentación de la demanda ejecutiva, sin la interrupción aludida por el proceso liquidatorio, ello devendría en el siguiente cálculo: la ejecutoria de las sentencias objeto de recaudo ejecutivo ocurrió el **21 de abril de 2009**, por consiguiente, los 18 meses a que alude el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, culminaron el 21 de octubre de 2010, y seguidamente los 5 años para impetrar la acción daría como fecha máxima de presentación de la demanda el 21 de octubre de 2015.

Sin embargo, atendiendo **la suspensión generada entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013**, es claro que los términos para presentar la demanda ejecutiva que aquí se estudia, se vieron afectados por tal circunstancia. En tal medida, para el 21 de octubre de 2010, apenas habían transcurrido 1 mes y 22 días de los 18 meses que establece la norma para que la sentencia fuera ejecutable. Luego entonces, como desde el 11 de junio de 2013, comenzó a correr nuevamente dicho término, quiere decir, que el actor contaba con 16 meses y 8 días más, de los 5 años restantes para solicitar la ejecución de la sentencia los cuales finiquitaran tan solo hasta el 19 de octubre de 2019.

Analizado el expediente, se evidencia que la demanda ejecutiva fue radicada ante la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Administrativos el 22 de noviembre de 2017 (fl.47), circunstancia por la cual en los términos expuestos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, se encuentra dentro de la oportunidad legal, atendiendo la suspensión generada entre el **12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013, momento en el cual culminó el proceso liquidatorio de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.**

Así las cosas, el Despacho desde ya, desestimaré el argumento suscitada por la entidad demandada.

## **ii. Incongruencia del mandamiento de pago:**

De otra parte, la Ugpp arguye que el mandamiento de pago desborda las facultades otorgadas por el artículo 430 del C.G.P., puesto que el Juzgado, libró mandamiento de pago, afirmando que existe una obligación y que la misma se encuentra insoluta. Así mismo afirma, que el valor por el cual se libró mandamiento ejecutivo no coincide con el solicitado por el ejecutante, ni con lo indicado en la parte motiva de la providencia que libro mandamiento de pago.

Al respecto, procede a recalcar el Despacho, que si bien la parte ejecutante, dentro del acápite de pretensiones preceptuó las mismas con diferentes valores: una por la suma de catorce millones ochocientos setenta y cuatro mil setecientos once pesos **(\$14.874.711)**, por concepto de intereses moratorios, desde la fecha de ejecutoria de la sentencia hasta la fecha en que la entidad demandada realizó el pago parcial del crédito, y otra por la suma de veintisiete millones setecientos noventa y nueve mil ciento once pesos **(\$27.799.711)**, por concepto de intereses moratorios, desde el día siguiente en que la entidad demandada realizó el pago parcial del crédito judicial hasta la fecha en que quede en firme la liquidación del crédito; el demandante, en el acápite de **“competencia y cuantía”, obrante a**



**folio 8 del plenario**, requisito sine qua non puede ser admisible la demanda ejecutiva, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 162 de la Ley 1437 del 2011, preceptuó: ***“Así mismo, por cuantía del proceso, la cual la estimo en la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MLC (\$42.673.822), de acuerdo a la liquidación detallada que se allega como anexo titulado “LIQUIDACIÓN INTERESES MORATORIOS” y que solicito se haga parte integral del presente acápite”.***

Así las cosas, encuentra el Despacho, que el valor por el cual se libró mandamiento de pago es acorde con el preceptuado y solicitado por el demandante.

No obstante lo anterior, recuerda el Despacho, que si bien se libró mandamiento de pago por el valor anteriormente dicho, como se expuso en el auto que dispuso librar mandamiento de pago, ***“los valores adeudados a título de intereses moratorios ascienden a la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MLC (\$42.673.822) m/cte, conforme la liquidación expuesta por el ejecutante, sin que necesariamente esta suma sea el valor a cancelar, toda vez que ello está sujeto a la determinación precisa de la solicitud de cumplimiento a la sentencia, las excepciones propuesta por al demandada y a la liquidación del crédito.”*** (fl. 52 vto)

Así mismo, se debe precisar que los valores a reconocer en el presente asunto, previa liquidación, se deberán encontrar comprendidos a partir del día siguiente hábil a la presentación de la solicitud del cumplimiento al fallo, hasta la fecha en la que se hizo efectiva la inclusión en nómina.

Así las cosas, frente al presente argumento propuesto, el Despacho mantendrá incólume el auto que dispuso librar mandamiento de pago.

### **iii. Inexistencia de la obligación:**

Frente a este punto, indica la recurrente, que si bien se acepta que el título base recaudo contiene la obligación de pagar intereses moratorios, la misma no opera de pleno derecho, sino que está sujeta a condición, la cual según arguye, en el presente caso no se cumplen; toda vez que no se encuentra dentro del expediente documento alguno que acredite que dentro del término de ejecutoria del fallo, y el cumplimiento del mismo, el demandante allegara la documentación requerida.

Pues bien, el Despacho, desde ya desestimaré la objeción propuesta por la entidad ejecutada, toda vez que, en el auto que libró mandamiento de pago, no se dejó dudas al respecto de la existencia de un título ejecutivo que contenga una obligación clara, expresa y exigible, puesto que se comprobó que el título ejecutivo lo constituyen varias actuaciones a saber:

**1)** Por un lado se encuentran las sentencias proferidas por este Juzgado el 22 de febrero de 2008 y por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –

Sección Segunda, Subsección D, M.P. Dra. Yolanda García de Carvajalino, el 26 de marzo de 2009 (fls.13-33).

**2)** Así mismo, se tiene la Resolución PAP 034765 del 27 de enero de 2011, emanada de la UGPP, en virtud de la cual se dio cumplimiento a los fallos antes aludidos, aunque de manera parcial en consideración de la parte ejecutante (fls. 36-39).

De lo anteriormente relacionado, considera el Despacho, que las sentencias proferidas, conjuntamente con los actos de ejecución y la liquidación que efectuó la UGPP para el cumplimiento de la sentencia, configuran un título ejecutivo, por darse cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 422 del Código General del Proceso, en razón a que la decisión se encuentra debidamente ejecutoriada y del contenido de la misma se desprende la obligación hoy reclamada por el ejecutante, que corresponde a la liquidación de los intereses moratorios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, siendo una de las órdenes impartidas por este estrado judicial y que no fue cumplida por el ente administrativo ejecutado.

Ahora bien, frente a la solicitud de cumplimiento de la sentencia a cargo del demandante, y la fecha a partir de la cual comenzarán a surtir los intereses moratorios pretendido, como bien lo estipuló el Despacho en el auto que libro mandamiento de pago: *“Cabe resaltar, que la causación de intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia, esto es, desde el 21 de abril de 2009, hasta la solicitud de cumplimiento al fallo, 11 de septiembre de 2010, cesó de conformidad con lo dispuesto en el art. 177 del CCA, pues el accionante dejó pasar más de 1 año para solicitar el cumplimiento del fallo. **Razón por la cual, el Despacho libraré mandamiento ejecutivo por los intereses moratorios insolutos causados a partir del día siguiente hábil a la solicitud del cumplimiento del fallo, esto es, 11 de septiembre de 2010, es decir, a partir del 13 de septiembre de 2010.**”<sup>12</sup>*

Así las cosas, frente a la totalidad de argumentos y/o objeciones propuestas por la recurrente, este Despacho, se mantendrá incólume frente a lo dispuesto en el auto proferido el día 14 de septiembre de 2018, que dispuso librar mandamiento de pago a favor del señor Álvaro Castillo Soto.

En virtud de lo anterior el Despacho,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO.- NO REPONER** y como consecuencia de ello **NO REVOCAR** la providencia calendada 14 de septiembre de 2018, que dispuso librar mandamiento de pago a favor de Álvaro Castillo Soto.

**SEGUNDO.- CÓRRASE** traslado a la parte demandante de las excepciones propuestas por la entidad demandada, por el término de diez (10) días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 443 del C.G.P.



---

<sup>12</sup> Folio 52 del plenario.

**TERCERO.-** Ejecutoriada este proveído, continúese con la etapa procesal correspondiente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO**  
Juez

<div><p><b>JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD</b> <b>CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA</b></p><p>Por anotación en <b>ESTADO ORDINARIO</b> notifico a las partes la providencia anterior hoy <b>16 DE JULIO DE 2019</b>, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)</p><p> <b>LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA</b> SECRETARIA</p></div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

